

contra el C. Gobernador del Distrito que le impuso la pena de muerte por el plagio del niño Manuel Mangino y Reynoso, cuyo juicio continuó el C. Lic. Ignacio Villava, Juez 1º del ramo de lo criminal de esta ciudad, en calidad de Juez de Distrito, por escusa del Juez 1º de Distrito, y por recusación con causa del Juez 2º del propio ramo, admitida de plano por el mismo. Considerando, respecto de la jurisdicción con que ha procedido, en calidad de Juez de Distrito el 1º del ramo de lo criminal, que ella procede de la ley de cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos: Considerando, respecto del punto relativo al amparo que se motiva en la violación de las garantías á que se refieren los artículos 20, 21, y 23, de la Constitución federal, que suspensas por la ley de 9 de Abril de 1870, á la cual se sujetó el C. Gobernador del Distrito al encausar y sentenciar á D. José Emilio Reynoso, no pueden decirse violadas en la persona de éste; pues por lo mismo de estar suspensas, no se disfruta de ellas, y no puede decirse que hay violación de garantías de que no se disfruta, y por consiguiente, que el C. Gobernador del Distrito ha procedido en el caso dentro del círculo de sus atribuciones. Se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el día 4 del presente y año, por el C. Lic. Ignacio Villava, Juez 1º del ramo de lo criminal de esta ciudad, funcionando como Juez de Distrito, que dice: "primero; el presente Juez ha sido competente para conocer del recurso de amparo interpuesto por los defensores de José Emilio Reynoso. Segundo; la justicia de la Unión no ampara ni protege á este reo."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoría respecto del segundo, los C. C. Presi-

dente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados).—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—L. Guzman.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo once de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, Oficial Mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por los sentenciados á muerte y no indultados, Juan Ortiz y Gregorio Rodríguez.

SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

Zacatecas, Abril quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el despacho telegráfico de Sombretito recibido el día de ayer á las ocho y media de la noche, en el que el defensor de los reos Juan Ortiz y Gregorio Rodríguez solicitan amparo pidiendo se suspenda la ejecución de la pena del último suplicio á que fueron condenados, por habérseles negado la gracia de indulto y tener pruebas suficientes que acreditan la honradez y honrra de bien de sus representados. Considerando: que en la petición del defensor F. Martinez no se expresa que en el juicio seguido contra los reos Ortiz y Rodríguez se hayan violado las garantías individuales; que en la misma solicitud ni se expresa la naturaleza del delito por el cual han sido condenados sus defensos, ni si la autoridad que los ha juzgado ha sido ó no competente, ó un Tribunal especial: que en la peti-

ción, al no observarse lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la ley de 20 de Enero de 1869, deja una incertidumbre sobre la naturaleza del hecho que el Juzgado necesita estimar para resolver con acierto, atendiendo á que si los reos Ortiz y Rodriguez han sido juzgados por delitos comunes y por las autoridades ordinarias, llegando el caso hasta pedir el indulto, la ley de 20 de Enero de 1869 por su disposición en el artículo 8º, no concede al Juzgado ninguna facultad para admitir el recurso y suspender la ejecución de la sentencia, pues que esto equivaldría á reprobarla ya dictada y á exigir que se abriera una nueva instancia por un Tribunal que había concluido sus funciones legales: que esa reprobación está prohibida expresamente por la ley citada de 20 de Enero de 1869: que si los reos Ortiz y Rodriguez han sido juzgados conforme á la ley de 9 de Abril del año anterior, tampoco puede admitirse el recurso, puesto que estando suspensas las garantías individuales para los ladrones y plagiarios hasta el día día del corriente, la ley general citada les niega el recurso sin que se haya manifestado que el juicio por el cual fueron sentenciados fué posterior á la fecha del diez del presente en que concluyó la suspensión de las garantías: Considerando por último: que el Juzgado ha tenido conocimiento de que el Supremo Gobierno del Estado ha mandado suspender la ejecución de los citados reos con el objeto de admitir los recursos legales que puedan promover, único objeto al cual se refiere la solicitud del defensor; de conformidad con lo dispuesto en los anteriores fundamentos, el Juzgado declara: que no admite el recurso de amparo promovido por el defensor F. Martínez en que solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia contra los reos Juan Ortiz y Gregorio Rodriguez.

Hágase saber y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revisión del presente auto, sacándose las copias respectivas para las publicaciones que pre-

vienen las leyes. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó, doy fé—
Manuel G. Solana—Luis G. Chavez

Es copia que certifico. Zacatecas, Abril diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril veinte y cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. F. Martínez, como defensor de Juan Ortiz y Gregorio Rodriguez condenados á muerte, y Considerando: que el telegrama dirigido de Sombbrero, el 14 del actual, al Juzgado de Distrito de Zacatecas, en que se impetró el amparo y se pidió que se mandara suspender la ejecución, no expresa cual es la garantía que se reputa violada, ni cual la autoridad responsable, ni es un recurso que esté formado en los términos que previenen la Constitución federal y la ley de 20 de Enero de 1869; se decreta: que se confirma el auto pronunciado el 15, del presente mes y año por el Juzgado de Distrito de Zacatecas, que declara que no se admite el recurso de amparo promovido por el defensor F. Martínez en que solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia contra los reos Juan Ortiz y Gregorio Rodriguez.

Devuélvase el expediente al Juzgado de que procede, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio*

Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril veinte y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta, oficial mayor.*

COMISO.

Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, contra los Sres. Cambuston, Fisher y C^{as}, por suplantacion en calidad de ochocientas sesenta y seis yardas de casimires de lana y algodón, delaradas por dichos señores, según la hoja de despacho número 18 del vapor inglés, «Cuban,» piel de oso de lana y algodón.

SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

“Heróica Veracruz, Marzo cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de comiso, seguido contra los Sres. Cambuston, Fischer y C^{as}, por ochocientas sesenta y seis yardas que declararon “piel de oso de lana y algodón,” en la hoja de despacho número diez y ocho correspondiente al vapor inglés “Cuban,” entrado á este puerto en diez de Agosto del próximo pasado año; la calificación de “casimir de lana y algodón” que el C. Vista en comision, hizo de dicho efecto; la citación que á dichos señores se hizo para que eligiesen el recurso que mas les conviniera, habiendo designado el judicial; visto el auto de iniciación del juicio ante este Juzgado; el en que se señaló día y hora para la celebración del juicio; lo alegado por las partes y el C. Promotor fiscal en la primera junta que tuvo lugar en treco de Setiembre último, pidiendo que el negocio se abriera á prueba, lo cual se decretó de conformidad por el Juzgado; vistas las pruebas rendidas por los interesados y las del C. Administra-

dor de la Aduana; lo expuesto nuevamente por las partes en junta de treinta y uno de Octubre último; y lo pedido en ella por el C. Promotor fiscal; visto lo demás que las mismas partes y el ministerio fiscal alegaron en la tercera junta, celebrada en tres de Noviembre próximo pasado, las declaraciones que para mejor proveer se recibieron posteriormente á los comerciantes citados por parte de la Aduana en la última junta; vistas finalmente las muestras de los géneros, que en comprobación de sus respectivos asertos presentaron la Aduana y los interesados, y el auto de citación para sentencia, y considerando: que según la fracción 7^a del artículo 23 del Arancel vigente, debe entenderse que hay suplantación siempre que se declaren efectos, que legalmente manifestados pagarían mayores derechos que los que se pretende pagar con la declaración ilegal; que en casos de suplantación, la ilegalidad consiste en hacerse la declaración, clasificando al efecto en alguna fracción de la tarifa, conforme á la cual se pagan menores derechos que los que se pagarían si dicho efecto se hubiera comprendido en la fracción en que sea y verdaderamente clasificarse; que en el presente caso, no puede decirse que las mercancías en cuestión deban pagar mayores derechos conforme á las apreciaciones hechas por el vista, que los que causaría la declaración hecha por los interesados, porque para esto sería necesario, ó que esa declaración estuviese comprendida en la Tarifa con alguna cuota, y es evidente que en ninguna parte de ella se encuentran las palabras “piel de oso.”

Considerando: que si los importadores hicieron la declaración de los géneros en cuestión con el nombre ya expresado de “piel de oso,” fué porque con éste, que es el de fábrica, los vinieron nombrados en factura por el remitente, ó ignoraban el contenido de los bultos, supuesto que estos se examinaron después de hecha la declaración; que los mismos peritos presentados por la Aduana han declarado que el género en